



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID, PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA QUE NO TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE BENEFICIARIAS DE LA DEFENSA JUDICIAL PRESTADA POR LA DIPUTACIÓN

En Valladolid, a ... de 29 JUL 2021 de 2021

REUNIDOS

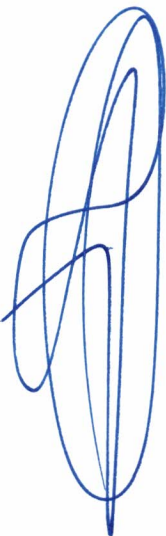


De una parte, el Ilmo. Sr. Presidente de la Excm. Diputación Provincial de Valladolid D. Conrado Iscar Ordóñez, actuando en representación de ésta, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 34.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.



Y de otra, D Javier Martín García, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid,

INTERVIENEN



En representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, lo que les exime de especificar sus circunstancias personales, reconociéndose plena capacidad para formalizar el presente convenio y en orden al mismo

MANIFIESTAN

Primero. Que la Diputación tiene atribuida por el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, como una de sus competencias básicas o nucleares, que debe extenderse a las otras entidades locales de la provincia.

Segundo. Que en este momento, la Diputación pretende dar un paso más en el cumplimiento del mandato competencial del mencionado artículo 36.1.b) de la Ley de Bases de Régimen Local, y asumir, la defensa judicial de las entidades locales de la provincia completando de esta forma el ámbito de la asistencia jurídica que tradicionalmente se ha venido prestando a través del Servicio de Asesoramiento



DIPUTACIÓN DE VALLADOLID



Local, y aprovechando las relaciones de cercanía de la administración provincial con las autoridades y personal de los ayuntamientos y la frecuencia de interacción entre ellos.

Tercero. Que ambas partes establecieron en su momento una colaboración, mediante convenio suscrito el diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, para la prestación de asistencia en los procedimientos judiciales de las entidades locales de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes, creando un turno de abogados colegiados a los que se han venido encomendando estos asuntos. Esta colaboración ha tenido resultados muy positivos y se ha mostrado como un instrumento útil para asistir a las entidades locales en el ámbito judicial.

Cuarto. Que, dado que la Diputación tiene la intención de asumir de forma progresiva la defensa judicial de las entidades locales con el alcance expresado, aprobando un documento de "Programación", el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, como una manifestación más de la voluntad de colaboración institucional que ha venido presidiendo sus relaciones con la Diputación de Valladolid, tiene la disposición de seguir llevando los asuntos judiciales de las entidades locales que, por aplicación de dicha Programación, no hayan adquirido la condición de beneficiarias del Servicio de Defensa Judicial de la Diputación.

Por ello se suscribe el presente convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto:

El presente convenio tiene por objeto establecer las relaciones de colaboración entre la Excm. Diputación Provincial Valladolid y el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, en orden a la prestación de la Defensa Judicial a las entidades locales de la provincia que, una vez puesto en marcha por la Diputación el Servicio de Defensa Judicial, no resulten inicialmente beneficiarias del mismo por aplicación de la Programación que apruebe la Institución Provincial, y que estas entidades podrán solicitar a través del presente Convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, en los términos y condiciones recogidos en el mismo y hasta que adquieran la condición de beneficiarias de la defensa judicial de la Diputación.

SEGUNDA: Forma de prestación de la Defensa Judicial por el Colegio de Abogados de Valladolid.

Se prestará a las referidas entidades locales solicitantes por un abogado designado por el Colegio de Abogados de entre aquellos de sus colegiados inscritos en el turno de Defensa de entidades locales.



TERCERA: Ámbito subjetivo.

El Servicio de Defensa Judicial se prestará a todas las entidades locales de la provincia de Valladolid con población inferior a 20.000 habitantes, así como a las mancomunidades formadas exclusivamente por municipios de la provincia de Valladolid, excluyendo a aquella o aquellas en la que se integre el municipio de Valladolid, mientras no tengan la consideración de beneficiarias de la Defensa Judicial prestada por la Diputación conforme a la programación que esta entidad apruebe.

CUARTA: Ámbito objetivo.

La Defensa Judicial del Colegio de Abogados se prestará a las referidas entidades locales en los siguientes órdenes jurisdiccionales:

- Ordinarios: contencioso administrativo, social, civil y mercantil.
- Especializados: Tribunal constitucional, Tribunal de Cuentas y Tribunales Económico-Administrativos.

En los procesos penales dicha Defensa Judicial se prestará únicamente en los siguientes supuestos:

- a) procesos penales en los que la parte denunciada sean las autoridades o empleados públicos municipales como consecuencia de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus cargos, siempre que su defensa haya sido asumida mediante acuerdo del pleno de la entidad o de la asamblea cuando se trate de una mancomunidad de municipios. No se prestará la Defensa Judicial cuando la denuncia se haya realizado por miembros de la propia Corporación.
- b) procesos penales iniciados por denuncia de la Entidad Local sólo en los casos de robo o actuaciones que menoscaben o destruyan los bienes de propiedad de la Entidad o que atenten contra la integridad de las autoridades o funcionarios locales.

En ningún caso se prestará el Servicio de Defensa Judicial en los procedimientos penales por injurias o calumnias.

QUINTA: Excepciones.

Quedarán exceptuados de la defensa judicial a través del Colegio de Abogados los siguientes supuestos:

- Impugnación de acuerdos y actos municipales por parte de los propios miembros corporativos de la entidad local.



- Litigios entre entidades locales o de estas contra la Diputación Provincial.
- La impugnación de actos o acuerdos municipales por parte de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, porque supongan infracción de la legalidad o invadan el principio de competencia de la Administración General del Estado o de la Junta de Castilla y León, conforme al artículo 65 de la Ley 7/1985.
- Litigios relativos a mociones de censura o cuestiones de confianza.
- Los supuestos de denegación del derecho de información regulado en el artículo 77 de la Ley 7/1985 y en los artículos 14 a 16 del Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Locales.
- Impugnaciones por la no convocatoria de plenos extraordinarios regulados en el artículo 46 de la Ley 7/1985.
- Asuntos en los que se estime, en informe motivado de la Asesoría Jurídica de la Diputación, que la posición procesal de la entidad solicitante es manifiestamente insostenible o carente de fundamento.
- Asuntos en los que la entidad local peticionaria de la defensa en juicio no haya remitido documentación y antecedentes suficientes para proceder a la defensa judicial, una vez requerida para la subsanación
- Supuestos en los que el órgano judicial haya fijado un plazo para realizar una concreta actuación (por ejemplo, requerimiento de expediente administrativo, otorgamiento de plazo para presentar escrito de alegaciones o de oposición, etc.) y la petición de la entidad local se haya recibido en la Diputación en una fecha en la que quede menos de la mitad del plazo para realizar aquella, contado este plazo desde el día siguiente al de recepción de la notificación judicial de que se trate por la entidad beneficiaria hasta su finalización o, en su caso, hasta la fecha de la vista.

SEXTA: Procedimiento.

Las peticiones de Defensa Judicial al Colegio de Abogados se harán siguiendo el procedimiento de petición recogido en el artículo 6 del Reglamento regulador de la Defensa Judicial a las entidades de la provincia aprobado por la Diputación, acompañando la documentación prevista en dicho artículo.



Una vez completa la documentación, desde la Asesoría Jurídica de la Diputación se remitirá junto con la petición al Colegio de Abogados, para que designe al letrado encargado de la Defensa Judicial y lo comunique a la Entidad Local peticionaria.

En el caso de que el Colegio de Abogados (o el Letrado que el Colegio haya designado) estimara que la pretensión contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, lo comunicará mediante informe debidamente motivado a la Entidad Local interesada y a la Diputación Provincial con antelación suficiente para que la Entidad Local pueda, en su caso y si lo estima oportuno, proceder a contratar los servicios de otro abogado, al margen del Servicio de Defensa Judicial de la Diputación y el Colegio de Abogados.

El letrado deberá tener informada en todo momento a la entidad local correspondiente de la evolución del asunto encomendado y de los hechos que se produzcan y sean de relevancia para su resolución. Asimismo, comunicará al Colegio de Abogados la situación general del procedimiento y, en todo caso, la resolución del mismo, a fin de que el Colegio pueda acreditar e informar a la Diputación de la efectividad del servicio prestado.

SEPTIMA: Compensación de los servicios prestados por el Colegio de Abogados.

La Diputación de Valladolid compensará los servicios prestados en concepto de Defensa Judicial del Colegio de Abogados con la cantidad de doce mil euros que será adaptada al número de asuntos turnados durante el año de la siguiente forma:

- Si el número de asuntos turnados durante el año no excediera de siete, el Colegio de Abogados devolverá a la Diputación la cantidad de seis mil euros.
- Si el número de asuntos turnados durante el año excediera de veinte, la Diputación abonará al Colegio la cantidad de seis mil euros más por cada cinco asuntos que excedan de veinte.

Las entidades beneficiarias del servicio asumirán íntegramente a su cargo los gastos de procurador, en el caso de que el mismo fuere necesario, así como las costas procesales, en su caso.

Igualmente serán de cuenta de dichas entidades los gastos que origine la expedición de documentos, peritajes, desplazamientos u otros que sean procedentes.

OCTAVA: Control y vigilancia de la ejecución del convenio:

Para la vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos con su firma se establece una comisión de seguimiento del mismo, formada por dos miembros de cada una de las partes. Esta comisión resolverá cualquier problema de interpretación o cumplimiento de que pudiera plantearse y deberá reunirse, al menos una vez al año.



NOVENA: Vigencia del convenio y causas de resolución.

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y estará vigente hasta el día 31 de diciembre de 2022, salvo que se resuelva anticipadamente por alguna de las siguientes causas:

1. Firma de otro convenio específico de colaboración entre la Diputación y el Colegio de Abogados que expresamente ponga fin a la vigencia del presente convenio.
2. Mutuo acuerdo entre las partes manifestado por escrito.
3. El incumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en este convenio.

A su entrada en vigor quedará sin efecto el Convenio anterior suscrito el 10 de junio de 1998 entre ambas partes.

DÉCIMA. Retribución de los servicios prestados a la fecha de terminación del Convenio.

La Diputación procederá a compensar los servicios prestados al final de cada ejercicio en función del número de asuntos turnados.

Todos los servicios prestados durante el año 2021 se compensarán de acuerdo con los criterios fijados por el presente convenio.

UNDÉCIMA. Modificación del convenio.

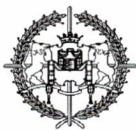
El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo de ambas partes firmantes.

DUODÉCIMA: Naturaleza y régimen.

- El presente convenio tiene naturaleza administrativa conforme establece el artículo 47.1 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación del contenido del presente convenio, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, los comparecientes firman el presente convenio, en el mismo lugar y fecha señalados en el encabezamiento.





DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
ASESORÍA JURÍDICA



20/a/21

Sr. D. Javier Martín García
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid

Me complace remitirle un ejemplar firmado del “*Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Valladolid y el Colegio de Abogados de Valladolid, para la Defensa Judicial de las Entidades Locales de la provincia que no tengan la consideración de beneficiarias de la defensa judicial prestada por la Diputación*”.

Un cordial saludo,

Valladolid, 16 de septiembre de 2021
**EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA
DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA,**



Fdo.: Guzmán Gómez Alonso